**Informe de ponencia para primer debate en Cámara al Proyecto de Ley Nº 181 de 2022 Cámara**

***“Por medio de la cual se establecen medidas que permitan la resocialización y reincorporación y se dictan otras disposiciones”***

Bogotá, D.C., octubre de 2022.

H. Representante

**JUAN CARLOS WILLS OSPINA**

Presidente

Comisión Primera Constitucional

H. Cámara de Representantes

**Referencia:** Informe de ponencia para ***Primer Debate*** del Proyecto de Ley Número 181 de 2022 Cámara.

Respetado Representante Wills,

En cumplimiento del encargo hecho por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional a través de la nota interna No. C.P.C.P. 3.1 – 0291 – 2022 del 20 de septiembre de 2022, y en atención a lo establecido en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5 de 1992, me permito rendir informe de Ponencia para Primer Debate alProyecto de Ley Nº 181 de 2022 Cámara, *“Por medio de la cual se establecen medidas que permitan la resocialización y reincorporación y se dictan otras disposiciones.”*,en los siguientes términos:

1. **ANTECEDENTES LEGISLATIVOS**

El proyecto Ley 181 de 2022 *“Por medio de la cual se establecen medidas que permitan la resocialización y reincorporación y se dictan otras disposiciones”*fue radicado el 06 de septiembre de 2022 ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes por parte de los Honorables Senadores, Enrique Cabrales Baquero, Ciro Alejandro Ramírez, Esteban Quintero Cardona y los Honorables Representantes, Oscar Leonardo Villamizar Meneses, José Jaime Uscátegui Pastrana, Juan Espinal y el suscrito ponente, remitido por competencia para iniciar su trámite a la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes**.** Finalmente, el 20 de septiembre de 2022 a través de la nota interna No. C.P.C.P. 3.1 – 0291 – 2022 fui designado como ponente para primer debate.

1. **OBJETO**

La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos de articulación entre el Estado y el sector privado, con el fin de permitir la correcta resocialización y reincorporación a la vida social y productiva de aquellas personas que por causa de condenas penales o procesos de reincorporación de grupos armados organizados, son hoy población vulnerable.

1. **JUSTIFICACIÓN**

Uno de los problemas que el Estado colombiano no ha podido resolver, a pesar de las múltiples estrategias, es la política penitenciaria y criminal. Muy seguido aparecen nuevas reformas modificando penas, procedimientos, aumentando beneficios, construyendo nuevas cárceles, pero aún así, no hay en el Estado una política y mecanismos que garanticen el paso más importante de la política criminal a nivel de derechos humanos, la resocialización.

Este proyecto pretende brindar una solución en estrategias específicas como beneficios en contratación pública, tributarios; pero también pretende generar acciones macro del Estado para generar rutas de estudio y trabajo, de emprendimiento, y de mandato de política pública que genere tejido social y permita la integración de las personas que por una razón u otra requieren, para evitar la reincidencia y construir verdadera paz, el abrazo de la sociedad.

1. **FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES**

La Constitución Política de 1991 establece en los artículos 1 y 2 lo siguiente:

***ARTICULO 1:****Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.*

***ARTICULO 2:****Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.*

*Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.*

De la lectura a los anteriores artículos, se establece que Colombia es un estado social de derecho que de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política, se encuentra fundada en el respeto de la dignidad humana y la prevalencia del interés general. Adicionalmente, en su artículo 2 establece que son fines esenciales del Estado el garantizar la efectividad de los principios, derecho y deberes consagrados en la Constitución, como también asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha considerado la dignidad humana principalmente como derecho fundamental autónomo, principio constitucional y valor constitucional[[1]](#footnote-1).

Por su parte, el principio a la dignidad humana, la Corte Constitucional ha considerado tres lineamientos, de la siguiente forma: entendida como autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse según sus características (vivir como quiera); ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien) y; intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones) [[2]](#footnote-2).

En ese sentido, la dignidad humana, se refiere a un derecho fundamental autónomo equivalente al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de serlo y la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana, siendo de eficacia directa[[3]](#footnote-3). Finalmente, como valor constitucional se considera un principio fundante del ordenamiento jurídico[[4]](#footnote-4).

Ahora bien, en el artículo 12 de la Constitución Política se encuentra la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes, la prohibición de penas o medidas de seguridad imprescriptibles en su artículo 28 y el derecho al debido proceso en su artículo 29[[5]](#footnote-5).

Es de anotar que el presente proyecto de ley, busca restablecer el estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y carcelario tal y como en reiteradas providencias de la Corte Constitucional se ha señalado, entre ellas la **Sentencia 267/18**[[6]](#footnote-6)**.**

De igual manera en el artículo 5 de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, se hace explícito el carácter protector y de respeto a la dignidad humana en el sistema penitenciario colombiano.

En razón de esto, tanto en el Código Penitenciario y Carcelario como en el Código Penal (Ley 599 de 2000) se estableció que la finalidad de la Pena y el tratamiento penitenciario es:

Ley 65 de 1993 – Código Penitenciario y Carcelario

*ARTÍCULO 9o. FUNCIONES Y FINALIDAD DE LA PENA Y DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. La pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación.*

*ARTÍCULO 10. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.*

Ley 599 de 2000 – Código Penal

**ARTÍCULO 4o. FUNCIONES DE LA PENA[[7]](#footnote-7).** La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión.

La finalidad de la pena en el ordenamiento jurídico colombiano es la resocialización de los reclusos, la reintegración a la sociedad de personas que cometieron delitos y por tanto no están en condiciones de continuar la vida en sociedad, no es con un fin de castigo o vengativo por las acciones cometidas como comúnmente se asocia, tal y como lo reafirma la Corte Constitucional en diferentes jurisprudencias como por ejemplo en la Sentencia C-026/16[[8]](#footnote-8).

**SENTENCIA 267 DE 2018 CORTE CONSTITUCIONAL**

**Estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario -**Lineamientos para su seguimiento a partir de mínimos constitucionales asegurables:

*“En el caso de la población carcelaria, la Corte Constitucional ha ofrecido lineamientos para el seguimiento al estado de cosas inconstitucional a partir de mínimos constitucionalmente asegurables. Estos parámetros no solo sirven para orientar la evolución de la estrategia de superación de dicho estado de cosas, sino también como guía, en los casos concretos, a la hora de establecer la naturaleza de la vulneración fundamental y el remedio judicial procedente para conjurarla. También, como punto de referencia necesario del diálogo interinstitucional que acabamos de referir. Los mínimos que deben ser garantizados en la vida en reclusión por las autoridades competentes se refieren a los siguientes aspectos: i) la resocialización, ii) la infraestructura carcelaria, iii) la alimentación al interior de los centros de reclusión, iv) el derecho a la salud, v) los servicios públicos domiciliarios y vi) el acceso a la administración pública y a la justicia. Estos mínimos constitucionalmente asegurables, como señaló la Sala Especial de Seguimiento, tienen carácter prima facie, es decir, no constituyen una lista taxativa ni exhaustiva que agote los temas de los cuales deben ocuparse las autoridades competentes, de manera que es plausible su adaptación a diferentes contextos (cárceles de mediana y alta seguridad, de hombres, de mujeres, mixtas, población carcelaria condenada y sindicada, ubicación geográfica, disponibilidad de recursos técnicos, entre otros)”.*

**SENTENCIA T-100/18 CORTE CONSTITUCIONAL.**

**Libertad de configuración legislativa en materia penal-**Contenido y alcance

*El derecho penal es la expresión de la política criminal del Estado, cuya definición, de acuerdo con el principio democrático y la soberanía popular (artículos 1º y 3º de la Constitución), corresponde de manera exclusiva al Legislador. En este sentido, la cláusula general de competencia legislativa prevista en los artículos 114 y 150 de la Carta, otorga al Congreso de la República la facultad de regular cuestiones penales y penitenciarias. En materia penal, el Legislador goza de un amplio margen para fijar el contenido concreto del derecho punitivo. De tal suerte que, en ejercicio de esta competencia, le corresponde determinar: (i) las conductas punibles; (ii) el quantum de las penas; y (iii) las circunstancias que las disminuyen o aumentan.*

**SENTENCIA T-267/15 CORTE CONSTITUCIONAL**

**Derechos fundamentales de personas privadas de la libertad-**Clasificación en tres grupos: derechos suspendidos, derechos intocables y derechos restringidos o limitados

*La jurisprudencia Constitucional ha clasificado los derechos fundamentales de los internos en tres categorías: i) aquellos que pueden ser suspendidos, como consecuencia de la pena impuesta (como la libertad física y la libre locomoción); ii) aquellos que son restringidos debido al vínculo de sujeción del recluso para con el Estado (como derechos al trabajo, a la educación, a la familia, a la intimidad personal); y iii) derechos que se mantienen incólumes o intactos, que no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentre sometido al encierro, dado a que son inherentes a la naturaleza humana, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de petición, entre otros.*

**SENTENCIA T-213/11 CORTE CONSTITUCIONAL**

**Derechos fundamentales del interno**-Reiteración de jurisprudencia

*“Esta Corporación ha determinado que los derechos fundamentales de los reclusos pueden clasificarse en tres grupos: (i) los derechos intocables, aquellos que son inherentes a la naturaleza humana y no pueden suspenderse ni limitarse por el hecho de que su titular se encuentre recluido. En este grupo se encuentran los derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad personal, la igualdad, libertad religiosa, debido proceso y petición, (ii) los derechos suspendidos, son consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, tales como: la libertad personal, la libre locomoción entre otros, (iii) los derechos restringidos, son el resultado de la relación de sujeción del interno para con el Estado, dentro de éstos encontramos los derechos al trabajo, a la educación, a la intimidad personal y familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión. En consecuencia, la relación de especial sujeción que existe entre las personas que se encuentran privadas de la libertad y el Estado, no es otra cosa que “una relación jurídica donde el predominio de una parte sobre la otra no impide la existencia de derechos y deberes para ambas partes”.*

**Tratamiento penitenciario-**Finalidad

*“La Corte Constitucional ha señalado que el tratamiento penitenciario presenta dos dimensiones fundamentales, la primera de ellas, referente al propósito de lograr la resocialización del delincuente y, la segunda, en lo concerniente a la relación que existe entre el derecho a acceder a programas de estudio o trabajo que permitan redimir pena y el derecho fundamental a la libertad personal. Desde esa óptica, los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios tienen el deber de restaurar los lazos sociales de los reclusos con el mundo exterior, pues de ello dependerá, en gran parte, la posibilidad de resocialización, motivo por el cual, debe ser una prioridad para estos Establecimientos la inclusión de los internos en programas de redención de pena durante las diferentes fases del tratamiento penitenciario. Lo anterior, teniendo en cuenta la incidencia del desarrollo de los mencionados programas en el derecho fundamental a la libertad de los internos”.*

**SENTENCIA C-261/96 CORTE CONSTITUCIONAL**

**Autonomía de los condenados/derecho a la dignidad humana**-función resocializadora**/estado social del derecho**

*“… Estas disposiciones concuerdan plenamente con la Constitución pues protegen la dignidad y autonomía de los condenados, y armonizan tales valores con la propia función resocializadora del sistema penal. En efecto, en el aspecto sustancial de la dignidad humana, se concentra gran parte del debate moderno sobre la función resocializadora de la pena y del sistema penal en general. La función resocializadora del sistema penal adquiere relevancia constitucional, no sólo desde el punto de vista fundamental de la dignidad, sino también como expresión del libre desarrollo de la personalidad humana. La función de reeducación y reinserción social del condenado debe entenderse como obligación institucional de ofrecerle todos los medios razonables para el desarrollo de su personalidad, y como prohibición de entorpecer este desarrollo.  Adquiere así pleno sentido la imbricación existente entre la dignidad, la humanidad en el cumplimiento de la pena y la autonomía de la persona, en relación todas con la función resocializadora como fin del sistema penal”.*

## **HACINAMIENTO Y REINCIDENCIA EN COLOMBIA**

El problema del hacinamiento ha ocupado un lugar preponderante, por ello, la discusión sobre cómo establecer y medir el hacinamiento como indicador de la gravedad de la crisis carcelaria, siendo uno de los asuntos centrales del control y seguimiento de las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad. La capacidad de la infraestructura penitenciaria y carcelaria no es óptima, lo que se acentúa con el mal estado y obsolescencia de buena parte de la actual infraestructura y la persistencia del hacinamiento. Lo anterior no permite garantizar las condiciones de habitabilidad digna y acceso a servicios mínimos a las que debe acceder los PPL, así como el cumplimiento de uno de los principales fines de la pena, esto es, la resocialización de los infractores de la ley.

En el 2018 la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la situación de hacinamiento carcelario que experimentaba el sistema penitenciario colombiano, recalcando que en los últimos años estas cifras se habían incrementado, a diferencia de lo reportado por otras fuentes oficiales[[9]](#footnote-9).

En la emisión de este comunicado, junto con el estudio titulado “Informe de Derechos Humanos del Sistema Penitenciario en Colombia (2017-2018)”, la Defensoría hace énfasis en que el hacinamiento es uno de los factores más importantes que contribuyen a la violación de todos los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad:

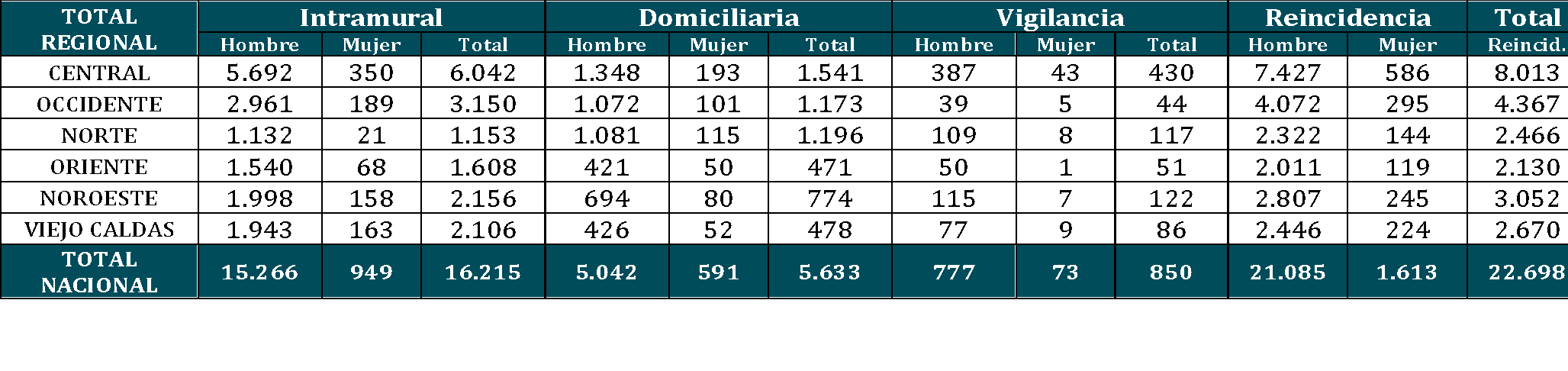
*“…Trae como consecuencia graves problemas de salud, de violencia, de indisciplina, de carencia en la prestación de servicios (trabajo, educación, asistencia social, deportes, educación, visita conyugal, servicios médicos, etc.), con una clara violación de la integridad física y mental de los reclusos, de su autoestima y de la dignidad humana. Igualmente, el hacinamiento, cuando sobrepasa el nivel crítico, se convierte en una forma de pena cruel, inhumana y degradante. Para la comisión es claro que en los penales que presentan condiciones de hacinamiento crítico, la calidad de vida de los reclusos sufre serios deterioros, al punto que no se pueden considerar sitios seguros ni para los internos, ni para el personal que trabaja con ellos.”*

*“En síntesis, a mayor hacinamiento, la calidad de vida de los reclusos y la garantía de sus Derechos Humanos y fundamentales es menor”*

Es preocupante que en los últimos años la cantidad de población reincidente se haya incrementado. En el mismo informe del INPEC, hacen resaltar que, de las 114.571 personas condenadas a enero de 2019, 21.151 personas que son el 18,4% de la población total del sistema, sean personas reincidentes, 92,7% de esta población son hombres y 7,3% mujeres.

Asimismo, el informe resalta:

*“La población reincidente contribuye a incrementar los indicadores de sobrepoblación y hacinamiento. Teniendo en cuenta que la población intramural fue 118.769 personas, si restamos los(as) reincidentes (16.141), las cifras serían: población intramuros 102.628, sobrepoblación 22.401 y el índice de hacinamiento 27,9%, con una reducción de 20,1 puntos porcentuales con respecto al actual. Finalmente, si sólo se tiene en cuenta la población intramural condenada sin reincidencia (63.113), se tendrían 17.114 cupos en los ERON. Si fuera posible asignar la totalidad de cupos disponibles, no habría sobrepoblación y por ende tampoco hacinamiento.”*

**Imagen 1.** Población reclusa reincidente. Reincidencia Nacional SISPEC. Abril 2021.

Estas condiciones generan un ciclo, el hacinamiento y las condiciones de los centros penitenciarios contribuyen a que los programas de resocialización para los reclusos fracasen, y, en consecuencia, la persona cumple su pena sin haber llevado a cabo un proceso exitoso que le garantice la reincorporación a la sociedad, recaen en las conductas delictivas y vuelven a ingresar al centro penitenciario aumentando la sobrepoblación del sistema. En un comunicado del Ministerio de Justicia y del Derecho se aborda esta problemática de la siguiente manera:

*“La resocialización y la prevención de la reincidencia son dos conceptos relacionados, pues no es posible prevenir la reincidencia si no se cumplen procesos de resocialización exitosos, y, como consecuencia de ello, las principales acciones para la prevención de la reincidencia son aquellas que fortalecen los procesos de resocialización que se deben cumplir en el Sistema Penitenciario y Carcelario de competencia del INPEC, aunque no son las únicas, ya que a la resocialización se suman las demás accione en materia de seguridad ciudadana y de prevención del delito en general.”*

En este orden de ideas, es claro que, si se lograra garantizar que el proceso de resocialización de los internos, podríamos abordar una de las causas del hacinamiento carcelario y combatir la reincidencia al mismo tiempo.

## **ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

Los altos índices de hacinamiento de la población carcelaria en Colombia, necesariamente nos remiten a la falta de infraestructura penitenciaria y carcelaria, por ello es que se propone la construcción y operación de esta infraestructura mediante la figura de las Alianzas Público-Privadas APP, tal y como lo señala el Grupo Banco Mundial:

*“Las alianzas público-privadas (APP) pueden ser un instrumento para satisfacer estas necesidades de servicios de infraestructura. Cuando las APP se diseñan correctamente y se implementan en entornos regulatorios equilibrados pueden aportar mayor eficacia y sostenibilidad a la prestación de servicios públicos como agua, saneamiento, energía, transporte, telecomunicaciones, atención de salud y educación. Las APP también pueden permitir una mejor distribución de riesgos entre las entidades públicas y privadas*[[10]](#footnote-10).”

La Ley 1508 de 2012 las define como “*un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y* *transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.*”

En consonancia con estas disposiciones, mediante este proyecto se autorizaría al Gobierno Nacional a realizar Alianzas Público Privadas (APP) en un marco regulatorio equilibrado, en el que la vigilancia y custodia de los condenados continua bajo el Estado Colombiano y la APP funcionarían como instrumento de vinculación de capital privado, que contribuirá de manera efectiva a la financiación de la infraestructura necesaria para la creación, organización y administración de los servicios de las Penitenciarías Productivas. Dichas proporciones, las determinará el Gobierno Nacional, ello en razón del equilibrio que debe existir en la configuración de las APP que se proponen en el proyecto de ley.

Asimismo, el proyecto de ley busca por un lado la no vulneración de derechos humanos en los centros penitenciarios para los condenados, donde la finalidad de la pena en el sistema progresivo penitenciario en Colombia pueda operar bajo una política criminal garantista en nuestro Estado Social de Derecho, y, por el otro lado, que los privados conforme a la vinculación, desarrollen obras de infraestructura penitenciarias. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley 1508 de del 2012, *“Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones.”*

Es de anotar que la Ley 1508 del 2012, se creó para incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura tanto productiva como social que requiere el país mediante las Alianzas Público Privadas (APP), la cual opera como la unión de esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y los empresarios y/o inversionistas para impulsar, desarrollar y mantener obras y proyectos de infraestructura. En el caso específico, es necesaria para proveer y mantener a largo plazo infraestructura pública penitenciaria y ofrecer servicios dignos y adecuados a los condenados para unas condiciones dignas frente a lo que ocurre con las cifras que en el presente proyecto de ley presenta.

Por otro lado, mediante el Decreto 4150 de 2011 “*Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, se determina su objeto y estructura*”, se establece que entre las funciones se encuentra la celebración de alianzas público- privadas y la potestad de realizar contratación con terceros para hacer seguimiento a este tipo de contratos. Es así como, entre las funciones de la Dirección de Gestión Contractual de esta entidad, el artículo 23 numeral 8 indica:

*ARTÍCULO 23. Dirección de Gestión Contractual. Las funciones de la Dirección de Gestión Contractual son las siguientes:*

*(…)*

*8. Elaborar estudios encaminados a definir modelos alternativos para el suministro de los bienes, el desarrollo de las obras, la atención y prestación de los servicios para el desarrollo de las funciones institucionales y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), de manera directa, o a través de convenios interinstitucionales, convenios de asociación entre entidades públicas, de la tercerización de servicios o de alianzas público–privadas, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y demás dependencias de la entidad.*

Por tanto, el modelo de APP no es ajeno a la realidad de la entidad y lo que se propone en este proyecto es diversificar la aplicación de esas alianzas para financiar infraestructura, administración y operatividad de un modelo penitenciario enfocado a aumentar los índices de éxito de los procesos de resocialización.

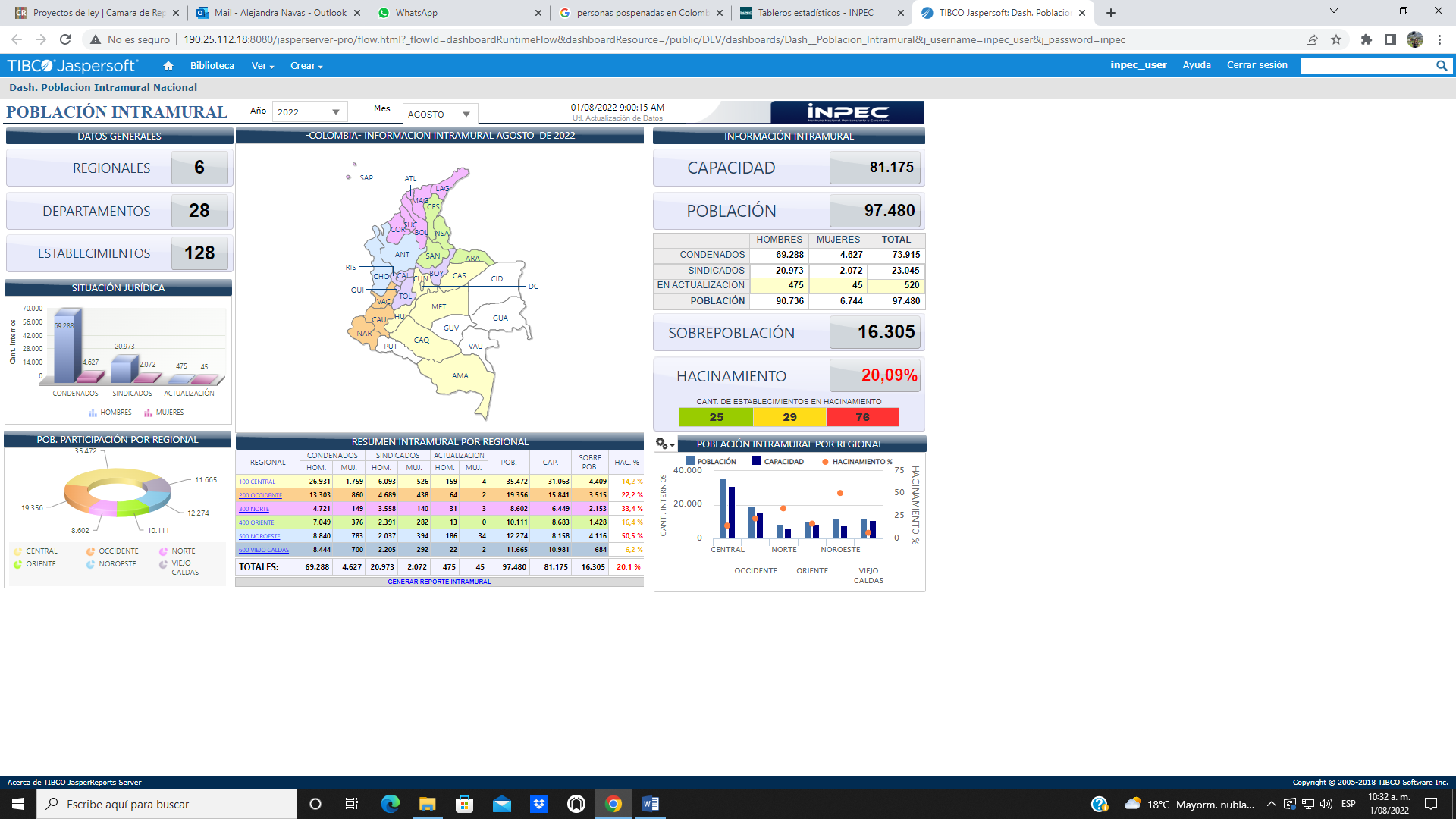
1. **POBLACIÓN POTENCIALMENTE BENEFICIARIA**

El presente proyecto de ley, pretende beneficiar a dos tipos de poblaciones, aquellos que por la comisión de un delito común, pagaron una pena y quedaron marcados; y aquellos que, por pertenecer a un grupo armado organizado, se desmovilizaron o iniciaron un proceso de desarme colectivo como producto de un proceso de negociación con el Gobierno Nacional.

Frente al proceso de reincorporación, la alta consejería para la estabilización reportó que *“Con corte al 31 de abril de 2021, más de 6.567 personas en proceso de reincorporación vinculadas a un proyecto productivo y que están desarrollando una unidad de negocio, con una inversión que ascienden los $60 mil millones. Asimismo, el Acuerdo indicaba los temas de salud por un periodo de 24 meses, y el gobierno ha mantenido la afiliación del 98% de las personas a través del Sistema General de Salud”[[11]](#footnote-11)*

Asimismo, se afirmó que en los últimos 3 años de implementación de la política Paz con Legalidad se han vinculado más de 8.400 excombatientes a un proyecto productivo (colectivo o individual) y que *“Estos proyectos tienen una financiación de $80.704 millones, de cuales $66.467 millones fueron entregados por el gobierno del presidente Iván Duque, como parte de su compromiso con el proceso de reincorporación”[[12]](#footnote-12)*

Por otro lado, frente a las personas que han sido condenadas por la comisión de delitos comunes, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informó que la población condenada, asciende a 73.915 personas de las cuales 69.288 son hombres y 4.627 son mujeres.

[[13]](#footnote-13)

Finalmente, y de confomidad con los argumentos anteriormente expuestos, se evidencia la falta medidas frente a la resocialización y reincorporación a la vida social y productivas de aquellas personas que por causa de condenas penales o procesos de reincorporación de grupos armados organizados son hoy población vulnerable.

1. **PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LOS BENEFICIOS Y EXENCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS Y EN EL IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS**

En la propuesta inicial se ha planteado una exención en el Impuesto sobre la Renta por un término de tres (3) años para aquellos proyectos de emprendimiento que inicien personas reincorporadas; sin embargo, encontramos dificultadas en la aplicación de dicha exención cuando los proyectos de emprendimiento se realicen a través de un vehículo societario al establecer que esta “*solo podrá aplicarse sobre un proyecto de emprendimiento por persona o grupo de personas que en cualquier tiempo se constituyan por una única vez*”.

También encontramos que la redacción inicial extiende los beneficios de exención a la “*Totalidad del impuesto sobre la renta*” lo cual genera ambigüedad respecto al tratamiento de las rentas laborales.

Nuestra propuesta parte de diferenciar la manera en la cual se pueden realizar los proyectos de emprendimiento (como persona natural o a través de un vehículo societario); estableciendo para las personas naturales que desarrollen dichos proyectos una exención en el Impuesto sobre la Renta de tres (3) años al añadir un literal al artículo 235-2 del Estatuto Tributario (únicas rentas exentas a partir del periodo 2019), y señalando de manera taxativa que no se entenderán como rentas exentas las que clasifiquen como rentas laborales o de trabajo. Todo esto buscando un tratamiento armónico con la finalidad de la norma: la creación de nuevos emprendimientos.

Respecto a la posibilidad de ejecutar proyectos de emprendimiento a través de vehículos societarios, es relevante resaltar la manera cómo tributan las sociedades nacionales en nuestro país, pues estas tributan por sus rentas a una tarifa general del 35% (Artículo 240 del Estatuto Tributario) y al momento de repartir dividendos estos se encuentran gravados en cabeza de sus accionistas a una tarifa del 0% al 10% (Artículo 242 del Estatuto Tributario). Por otra parte, en caso tal que los dividendos se entiendan como gravados por no cumplir los limites del artículo 49 del Estatuto Tributario (dentro de los cuales están los provenientes de rentas exentas) a estos además se les deberá aplicar la tarifa general del artículo 240 del Estatuto Tributario (35%).

Así las cosas, se debe plantear no una exención en el Impuesto sobre la Renta para las sociedades que realicen este tipo de proyectos de emprendimiento (ya que al momento de la repartición de dividendos estos estarían gravados a la tarifa del 35% y posteriormente a la tarifa del 10%), sino una tarifa del 0% la cual permita una repartición de dividendos no gravados, a demás de una tarifa del 0% en el Impuesto a los dividendos.

Por último, como una cláusula especial antiabuso, se establece que este beneficio se otorgará a una sociedad cuando el 100% de sus socios o accionistas sean personas que cumplan con la calidad de reincorporados, y que en el caso de cambio de la titularidad de derechos sobre el patrimonio (acciones, cuotas o partes de interés), la repartición de dividendos se encontrará gravada a las tarifas de los artículos 240 y 242 del Estatuto tributario (35% y 10% respectivamente).

Por último, se establece en la propuesta inicial un régimen especial de tributación para aquellas sociedades que “d*ediquen su actividad económica al empleo de personas reincorporadas*”, lo cual es extraño ya que la actividad económica de ningún ente social es emplear personas, esto se entiende mas una necesidad para el desarrollo de la actividad económica.

Como entendemos que la finalidad de la norma es que los empresarios y empleadores vean atractivo contratar personas que cumplan con la calidad de reincorporados, nuestra propuesta se basa en un régimen de descuento extraordinario, el cual permitirá deducir por el empresario en el impuesto sobre la renta un 250% del valor pagado a aquellas personas que cumplan con la calidad de reincorporados en el marco de un contrato laboral, sin llegar a determinar que este sea a término indefinido como lo planteó en su momento la Ley de Economia Naranja, evitando así barreras que limiten la aplicación de la norma.

1. **INICIATIVA LEGISLATIVA**

El Proyecto de Ley se ajusta a las facultades conferidas al congreso de la República y al ejercicio de las funciones que le corresponden constitucionalmente, establecidas en los Artículos 150 y 154 de la Constitución Política y concordantes, en consonancia los preceptos de la Ley 5 de 1992, para la iniciativa legislativa, así como a la Doctrina Jurisprudencial de la Corte Constitucional.

El presente Proyecto de Ley, garantiza y desarrolla el cumplimiento de los derechos constitucionales consagrados en la Constitución Política y cuya finalidad es la de fortalecer la resocialización de los reclusos en Colombia.

En materia del gasto público, referente a las partidas presupuestales a las que pudiere llegar autorizar el proyecto de la referencia, es de señalar que frente a lo dispuesto en el presente Proyecto de Ley, en materia del gasto público, la Sentencia C 490/94, ha manifestado, en este sentido: "*Pensamos que es necesa****ri****o devolver al Congreso la iniciativa en materia de gastos, que no puede confundirse con la iniciativa o capacidad de modificar las partidas propuestas por el Gobierno en el proyecto de presupuesto. Son dos figuras radicalmente distintas. En la teoría política cuando se enuncia y comenta la restricción de la iniciativa parlamentaria de gastos, siempre se hace referencia al presupuesto, que es un acto-condición y no a la ley previa creadora de situaciones jurídicas de carácter general. Por lo demás respecto a la realización o desembolso de las inversiones existen dos actos-condiciones: el primero, su incorporación a los planes y programas de desarrollo económico y social 5 (sic), el segundo su incorporación en los rubros de gastos presupuestales*"[[14]](#footnote-14)

El artículo 150 de la Constitución Política le devolvió la potestad al Congreso, restituyéndole la iniciativa en materia del gasto que la Reforma Constitucional de 1968 les había privado, y como lo ha manifestado la jurisprudencia, en reiteradas ocasiones, este cambio fue insertado ex profeso por el Constituyente de la Carta Política de 1991, aduciendo que no puede confundirse la iniciativa en materia de gastos con la iniciativa o capacidad de modificar las partidas presupuestales por el Gobierno en el proyecto de presupuesto, devolviéndole al poder legislativo, la capacidad para presentar proyectos de ley en materia *del gasto: "Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, o en el gobierno nacional... No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del gobierno las leyes que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas, las que autoricen aportes o suscripciones del estado a empresas industriales o comerciales*".

Así, tal y como, lo ha expresado y decantado la doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional, existen dos momentos diferentes en materia del gasto público, en primer lugar la ordenación del gasto público que puede ser de iniciativa legislativa y, en segundo lugar, la eventual inclusión de la partida correspondiente, en la Ley de Presupuesto, por parte del ejecutivo, que constituyen dos actos jurídicos distintos, evento en el cual es completamente legitima y exequible esta iniciativa parlamentaria, lo que se deduce de la Sentencia C-859/01: "*Esta doctrina constitucional ha sido decantada partiendo del análisis del principio de legalidad del gasto público que supone la existencia de competencias concurrentes, aunque separadas, entre los órganos legislativo y ejecutivo, correspondiéndole al primero la ordenación del gasto propiamente dicha y al segundo la decisión libre y autónoma de su incorporación en el Presupuesto General de la Nación, de manera que ninguna determinación que adopte el Congreso en este sentido puede implicar una orden imperativa al Ejecutivo para que incluya determinado gasto en la ley anual de presupuesto, so pena de ser declarada inexequible"* (...) *Tal como está concebida esta determinación no encuentra la Corte reparo alguno de constitucionalidad en su contra, en la medida en que encaja perfectamente dentro de la competencia constitucional de ordenación del gasto a cargo del Congreso de la República, al tiempo que no consiste en una orden imperativa al Ejecutivo para que proceda a incluir los recursos correspondientes en el presupuesto general de la Nación”[[15]](#footnote-15).*Y tal, como está el Proyecto de Ley, la autorización contenida en él, no constituiría, de manera alguna, una orden imperativa al Gobierno Nacional, en materia del gasto público que este proyecto pudiere conllevar.

1. **CONFLICTO DE INTERESES**

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, *“Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones”,* que establece que tanto el autor del proyecto y el ponente dentro de la exposición de motivos, deberán incluir un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, sirviendo de guía para que los otros congresistas tomen una decisión en torno, si se encuentran incursos en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar.

En ese orden de ideas, el presente proyecto de ley, por ser de carácter general, no configura un beneficio particular, actual y directo para ningún congresista, teniendo en cuenta que, la propuesta versa sobre establecer medidas que permitan la resocialización y reincorporación a la vida social y productiva de personas condenadas penalmente y personas en reincorporación, siendo de interés general que no beneficiaría a ningún congresista de forma particular, actual y directa.

1. **PLIEGO DE MODIFICACIONES**

Se han planteado modificaciones; para mayor claridad de los miembros de la Comisión Primera, a continuación, presentamos un cuadro comparativo donde se pueden evidenciar con mayor facilidad.

| **TEXTO ORIGINAL.** | **TEXTO PROPUESTO.** | **OBSERVACIONES.** |
| --- | --- | --- |
| **TÍTULO:**  Por medio de la cual se establecen medidas que permitan la resocialización y reincorporación y se dictan otras disposiciones***.*** | **TÍTULO:**  Por medio de la cual se establecen medidas que permitan la resocialización y reincorporación **de las personas privadas de la libertad (PPL) en Colombia, se modifica el Estatuto Tributario** y se dictan otras disposiciones. | Se especifica la población potencialmente beneficiada y agrega la modificación del estatuto tributario. |
| **ARTÍCULO 1. OBJETO.** La presente ley pretende generar mecanismos de articulación entre el Estado y el sector privado que permitan la verdadera resocialización y reincorporación a la vida social y productiva de aquellas personas que por causa de condenas penales o procesos de reincorporación de grupos armados organizados son hoy población vulnerable. ~~Mediante los presentes mandatos de ley se pretende reivindicar el rol de las penas y la función de individuos que ya cumplieron su deuda con la sociedad y que requieren del apoyo social para evitar la reincidencia. Asimismo, el cumplimiento de los fines de la pena en cuanto a resocialización permitirá alcanzar los principios de paz, dignidad humana, y la solidaridad de las personas como lo manda la Constitución Política.~~ | **ARTÍCULO 1. OBJETO.** La presente ley **tiene por objeto** **establecer** mecanismos de articulación entre el Estado y el sector privado**, con el fin de permitir la correcta** resocialización y reincorporación a la vida social y productiva de aquellas personas que por causa de condenas penales o procesos de reincorporación de grupos armados organizados, son hoy población vulnerable. | Se modifica la redacción del artículo y se suprime parte del artículo. |
| **ARTÍCULO 2. DESTINATARIOS.** Serán destinatarios de la presente ley:   1. **Reincorporados.** Aquellas personas que hayan cumplido la pena de prisión o que hayan sido beneficiarios de medidas alternativas o amnistías como consecuencia de procesos de paz o de negociaciones que haya hecho el gobierno nacional con diferentes grupos organizados al margen de la ley ~~en cualquier tiempo~~. 2. Las autoridades y entidades públicas a nivel nacional o territorial que, en el marco de sus funciones ~~deban actuar como vehículos de~~ procesos de reincorporación y resocialización. 3. Los particulares que, como consecuencia de su actividad privada, brinden ayuda en materia económica, laboral, educativa o de cualquier tipo para generar un tejido social apto ~~para la~~ resocialización y reincorporación. | **ARTÍCULO 2. DESTINATARIOS.** Serán destinatarios de la presente ley:   1. **Reincorporados.** Aquellas personas que hayan cumplido la pena de prisión o que hayan sido beneficiarios de medidas alternativas o amnistías como consecuencia de procesos de paz o de negociaciones que haya hecho el Gobierno Nacional con diferentes grupos organizados al margen de la ley. 2. Las autoridades y entidades públicas a nivel nacional o territorial que, en el marco de sus funciones **sean competentes en** procesos de reincorporación y resocialización. 3. Los particulares que, como consecuencia de su actividad privada, brinden ayuda en materia económica, laboral, educativa o de cualquier tipo para generar un tejido social apto **que contribuya a** la resocialización y reincorporación. | Se elimina “en cualquier tiempo” del literal A.  Se modifica la redacción del literal B.  Se modifica la redacción del literal C |
| **ARTÍCULO 3. PROFESIONALES PARA LA RESOCIALIZACIÓN.** Todos los centros penitenciarios y carcelarios deberán contar con un grupo de psicólogos ~~ocupacionales~~ y trabajadores sociales que propenderá por la resocialización y reinserción social de las personas privadas de la libertad. Velarán por la continuidad de los penados en la capacitación y los procesos productivos, la orientación y el acompañamiento en procesos psicosociales ~~incluso luego del cumplimiento de la pena, momento en el que deberán continuar con el debido seguimiento y apoyo para las personas reincorporadas.~~ | **ARTÍCULO 3. PROFESIONALES PARA LA RESOCIALIZACIÓN.** Todos los centros penitenciarios y carcelarios deberán contar con un grupo de psicólogos y trabajadores sociales, que propenderán por la resocialización y reinserción social de las personas privadas de la libertad. Así mismo, velarán por la continuidad de los penados en la capacitación y los procesos productivos, la orientación y el acompañamiento en procesos psicosociales. | Se elimina la parte final del artículo. |
| **ARTÍCULO 4.  ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.** Se autoriza al Gobierno Nacional a realizar Asociaciones Público Privadas (APP) como instrumento de vinculación de capital privado para financiar programas de apoyo a la reincorporación y resocialización ~~de las personas reincorporadas~~.  Dichas alianzas podrán incluir emprendimientos estatales que permitan la explotación económica y comercial de privados cuya mano de obra sea mayoritariamente personas reincorporadas. | **ARTÍCULO 4.  ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.** Se autoriza al Gobierno Nacional a realizar Asociaciones Público Privadas (APP) como instrumento de vinculación de capital privado, para financiar programas de apoyo a la reincorporación y resocialización.  Dichas alianzas podrán incluir emprendimientos estatales que permitan la explotación económica y comercial de privados, cuya mano de obra sea mayoritariamente personas reincorporadas. | Se modifica la redacción del artículo. |
| **ARTÍCULO 5. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.** El Ministerio de Justicia y del Derecho en conjunto con el Ministerio del Trabajo ejercerán el control, inspección y vigilancia sobre las Alianzas Público Privadas que se generen como consecuencia del artículo 4 de la presente ley. | **ARTÍCULO 5. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.** El Ministerio de Justicia y del Derecho en conjunto con el Ministerio del Trabajo ejercerán el control, inspección y vigilancia sobre las Alianzas Público Privadas que se generen como consecuencia del artículo 4 de la presente ley. |  |
| **ARTÍCULO 6. AMPLIACIÓN PROGRESIVA PROGRAMAS DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN.** El ministerio de Justicia y del derecho, ~~en concurrencia~~ con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y la Unidad de Servicio Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, ~~en coordinación con el SENA y en Ministerio de educación~~ deberán presentar un plan de ampliación de los programas de trabajo y estudio intracarcelario que permita tener los cupos suficientes para todas las personas que cumplen penas. Dicho plan deberá ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. | **ARTÍCULO 6. AMPLIACIÓN PROGRESIVA, PROGRAMAS DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN.** El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y la Unidad de Servicio Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, deberán presentar un plan de ampliación de los programas de trabajo y estudio intracarcelario que permita tener los cupos suficientes para todas las personas que cumplen penas. Dicho plan deberá ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.  El servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, deberá desarrollar programas focalizados para la capacitación completa, integral y sostenida en el tiempo para los reincorporados, y, aquellos que aún están cumpliendo pena, dicha formación deberá acompañarse de asistencia para el emprendimiento y la vinculación laboral.  Para lo anterior, se autoriza al servicio Nacional de Aprendizaje- SENA a realizar Asociaciones Público Privadas (APP) para lograr obtener el mayor beneficio en cuanto a espacios laborales para los reincorporados o penados. | Se modifica el artículo en concordancia a lo establecido en las Leyes 65 de 1993 y 1709 de 2014, el servicio de educación para la rehabilitación hace parte esencial de la política criminal y por ende su organización está en cabeza del Ministerio de la Justicia y el Derecho y del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. En estos términos, este servicio debe incorporar elementos pedagógicos pertinentes que aporten a la resocialización y estrategias didácticas acordes con el contexto de la privación, razón por la cual deben ser propuestos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, como entidad responsable de esta población y del proceso de resocialización.  Por lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional no tendría la competencia para dirigir “el proceso de calidad de la educación que se les otorgue a la población privada de la libertad”, dadas las finalidades a las cuales deben responder esta modalidad de educación. |
| **~~ARTÍCULO 7. CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO.~~** ~~El servicio Nacional de Aprendizaje- SENA deberá desarrollar programas focalizados para la capacitación completa integral y sostenida en el tiempo para los reincorporados y aquellos que aún están cumpliendo pena, dicha formación deberá acompañarse de asistencia para el emprendimiento y la vinculación laboral.~~  ~~Para lo anterior, se autoriza al servicio Nacional de Aprendizaje- SENA a realizar Asociaciones Público Privadas (APP) para lograr obtener el mayor beneficio en cuanto a espacios laborales para los reincorporados o penados.~~ |  | Se elimina el artículo. |
| **~~ARTPICULO 8.~~**  **SEGUIMIENTO Y SOSTENIMIENTO.** Culminada la etapa de capacitación ~~y para aquellos reincorporados que les interese continua con emprendimientos propios, INNPULSA~~ la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional deberá crear un programa de apoyo y seguimiento a los proyectos productivos de los reincorporados.  El seguimiento deberá garantizar el monitoreo y asistencia técnica, con lineamientos claros que permitan concretar las metas de desarrollo de emprendimiento de cada reincorporado. | **ARTICULO 7.**  **SEGUIMIENTO Y SOSTENIMIENTO.** Culminada la etapa de capacitación, la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional **o quien haga sus veces**, deberá crear un programa de apoyo y seguimiento a los proyectos productivos de los reincorporados interesados. El seguimiento deberá garantizar el monitoreo y asistencia técnica, con lineamientos claros que permitan concretar las metas de desarrollo de emprendimiento de cada reincorporado. | Se corrige ortografía del encabezado del artículo y se modifica la numeración.  Se agrega “o quien haga sus veces”. |
| **~~ARTÍCULO 9.~~ PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN SOCIAL.** El gobierno nacional, deberá en el término de un (1) año desarrollar una estrategia integral de concientización social frente a la necesidad de brindar oportunidades laborales, económicas e integración social para reincorporados.  Dichos programas deberán incluir despliegue en medios masivos de comunicación, mesas de trabajo que integren autoridades territoriales y miembros de la sociedad civil que permitan establecer mecanismos de socialización social. | **ARTÍCULO 8. PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN SOCIAL.** El Gobierno Nacional, deberá en el término de un (1) año desarrollar una estrategia integral de concientización social frente a la necesidad de brindar oportunidades laborales, económicas e integración social para reincorporados.  Dichos programas deberán incluir despliegue en medios masivos de comunicación, mesas de trabajo que integren autoridades territoriales y miembros de la sociedad civil que permitan establecer mecanismos de socialización social. | Se modifica la numeración del artículo. |
| **ARTÍCULO 10. ~~EXCENCIÓN EN RENTA.~~** ~~Los proyectos de emprendimiento que inicien personas reincorporadas tendrán exención de la totalidad del impuesto de renta por un término de tres (3) años, solo podrá aplicarse el beneficio tributario sobre un proyecto de emprendimiento por persona o grupo de personas que en cualquier tiempo se constituyan por una única vez.~~  Dicha exención se aplicará posterior prueba de sentencia cumplida o reconocimiento como ex miembro de grupo organizado que haya sido beneficiario de proceso de negociación con el gobierno nacional. La reincidencia será causal de pérdida inmediata del beneficio.  El presente beneficio aplicará únicamente para aquellos reincorporados que hayan cumplido pena o hayan sido beneficiados entre el año 2000 y hasta la fecha. | **ARTÍCULO 9. ADICIÓNESE EL NUMERAL 10 AL ARTÍCULO 235-2 Y EL PARÁGRAFO 9 AL ARTÍCULO 240 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL.**  Artículo 235-2.  10. Las rentas percibidas por personas reincorporadas en el marco de proyectos de emprendimiento por un término de tres (3) años.  Dicha exención se aplicará posterior a la prueba de sentencia cumplida o reconocimiento como ex miembro de grupo organizado que haya sido beneficiario de proceso de negociación con el gobierno nacional. La reincidencia será causal de pérdida inmediata del beneficio.  El presente beneficio aplicará únicamente para aquellos reincorporados que hayan cumplido pena o hayan sido beneficiados entre el año 2000 y hasta la fecha.  No será aplicable el presente beneficio a las rentas que clasifiquen como rentas laborales o de trabajo.  Artículo 240.  Parágrafo 9. Las sociedades nacionales en las cuales el 100% de sus socios o accionistas cumplan con la calidad de reincorporados tributarán a una tarifa del 0% por un término de tres (3) años desde su constitución.  Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a los socios o accionistas que cumplan con la calidad de reincorporados tributarán a una tarifa del 0%.  Cuando una sociedad beneficiaria de la presente tarifa en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios reparta dividendos a una persona natural o jurídica que no cumpla las condiciones de reincorporado, estos estarán sujetos a las tarifas señaladas en los artículo 240 y 242 de este Estatuto, según el periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta. | Se modifica la numeración del artículo.  Se modifica la redacción del artículo. |
| **ARTÍCULO 11. ~~RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN SOCIEDAD DEDICADAS A LA REINCORPORACIÓN Y RESOCIALIZACIÓN.~~** ~~Las sociedades, que sean micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que dediquen su actividad económica al empleo de personas reincorporadas, o por lo menos el 50% de la planta total de la sociedad, cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al impuesto sobre la renta y complementarios, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación:~~  ~~a) La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de las nuevas sociedades, que sean micro y pequeñas empresas, será del 0%; por tres (3) años; la tarifa será del 25% de la tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas o asimiladas por los tres (3) años siguientes la tarifa será del 50% de la tarifa general por los tres (3) años subsiguientes. A partir del noveno año, la tarifa será plena~~  ~~b) La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de las nuevas sociedades, que sean medianas y grandes empresas, será del 50% de la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios para personas jurídicas o asimiladas por tres (3) años; la tarifa será del 75% de la tarifa general por los tres (3) años siguientes. A partir del sexto años, la tarifa será plena.~~  ~~Los beneficios se mantendrán siempre que la sociedad demuestre que durante el tiempo del beneficio se mantuvo de forma permanente el porcentaje de nómica y objeto social, so pena de las consecuencias penales de encontrarse información falsa.~~ | **ARTÍCULO 10. ADICIÓNESE AL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL EL ARTÍCULO 108-6. DEDUCCIÓN POR CONTRATACIÓN LABORAL A REINCORPORADOS.** Los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir el 250% de los pagos que realicen por concepto de salario, en relación con los empleados que cumpla la condición de reincorporados.  La deducción máxima por cada empleado no podrá exceder doscientos cuarenta (240) UVT mensuales y procederá en el año gravable en el que el empleado sea contratado por el contribuyente.  Para efectos de acceder a la deducción de que trata este artículo, debe tratarse de nuevos empleos y el empleado deberá ser contratado con posterioridad a la vigencia de la presente Ley y cumplir con las calidades de reincorporados.  La Fiscalía General de la Nación expedirá al contribuyente una certificación en la que se acredite que sus trabajadores cumplen con las calidades de reincorporados como requisito para poder acceder a la deducción de que trata ese artículo.  La Fiscalía General de la Nación llevará un registro anualizado de todas las certificaciones de contratación a reincorporados que expida, con la identificación del empleado y del contribuyente. | Se modifica la numeración del artículo.  Se modifica la redacción de todo el artículo. |
| **ARTÍCULO 12°. PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES DE LA POBLACIÓN POST PENADA.** En los procesos de licitaciones públicas, concurso de méritos, para incentivar el sistema de preferencia a favor de las personas naturales ~~de la~~ post penada o personas jurídicas que tengan trabajadores pertenecientes a la población post penada, las entidades estatales deberán otorgar el cero punto cinco por ciento (0.5%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores ~~con discapacidad~~ en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:   1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 2. Acreditar el número mínimo de personas pertenecientes a la población post penada en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.   Verificados los anteriores requisitos, se asignará el cero punto cinco por ciento (0.5%) a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores de la población post penada, señalados a continuación:   |  |  | | --- | --- | | **Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente** | **Porcentaje mínimo de trabajadores de la población post penada exigido** | | Entre 1 y 30 | 1 | | Entre 31 y 100 | 3 | | Entre 101 y 150 | 5 | | Entre 151 y 200 | 7 | | Más de 200 | 10 |   **Parágrafo.** Para ~~efectos~~ de lo~~s~~ señalado en el presente artículo, si ~~lo~~ oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. | **ARTÍCULO 11. PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES DE LA POBLACIÓN POST PENADA.** En los procesos de licitaciones públicas, concurso de méritos, para incentivar el sistema de preferencia a favor de las personas naturales post penadas o personas jurídicas que tengan trabajadores pertenecientes a la población post penada, las entidades estatales deberán otorgar el cero punto cinco por ciento (0.5%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten **estas vinculaciones** en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:   1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 2. Acreditar el número mínimo de personas pertenecientes a la población post penada en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.   Verificados los anteriores requisitos, se asignará el cero punto cinco por ciento (0.5%) a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores de la población post penada, señalados a continuación:   |  |  | | --- | --- | | **Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente** | **Porcentaje mínimo de trabajadores de la población post penada exigido** | | Entre 1 y 30 | 1 | | Entre 31 y 100 | 3 | | Entre 101 y 150 | 5 | | Entre 151 y 200 | 7 | | Más de 200 | 10 |   **Parágrafo.** Para efecto de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. | Se modifica la numeración del artículo.  Se corrige la redacción del artículo. |
| **ARTÍCULO 13°. SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** Las entidades a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores de la población post penada que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre.  Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.  **Parágrafo.** La reducción del número de trabajadores de la población post penada acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito. | **ARTÍCULO 12. SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** Las entidades a través de los supervisores o interventores del contrato, según corresponda, deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores de la población post penada que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre.  Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de trabajo, y, la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.  **Parágrafo.** La reducción del número de trabajadores de la población post penada acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito. | Se corrige la numeración del artículo.  Se corrige la redacción del artículo. |
| **ARTÍCULO 14. SISTEMA DE PREFERENCIA.** En cumplimiento de los previsto en los numerales 7 y 8 del artículo 13 de la ley 1618 de 2013, si en la evaluación hay empate entre proponentes que cumplan con el requisito de planta de población post penada, ~~la entidad estatal desempatará a favor de aquella que tenga más mujeres de dicha población dentro de su planta de trabajo, si persistiese el empate~~ se remitirá a los criterios de desempate convencionales para el tipo de modalidad contractual que esté en curso. | **ARTÍCULO 13. SISTEMA DE PREFERENCIA.** En cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 y 8 del artículo 13 de la ley 1618 de 2013, si en la evaluación hay empate entre proponentes que cumplan con el requisito de planta de población post penada, se remitirá a los criterios de desempate convencionales para el tipo de modalidad contractual que esté en curso. | Se modifica la numeración del artículo.  Se elimina una parte del articulado. |
| **ARTÍCULO 15. MANDATO DE POLÍTICA PÚBLICA.** El gobierno nacional, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, deberá presentar una política pública integral para la resocialización y reincorporación que integre a las diferentes entidades de la sociedad civil, nación, ramas del poder público, entes de control y entes territoriales con metas definidas y costo presupuestal para la implementación.  Dicho proyecto de política pública deberá ser presentado al año siguiente de la entrada en vigencia de la presente ley.  Sus seguimiento y resultados serán publicados de forma anual en la página web de las entidades nacionales que intervienen en el proceso. | **ARTÍCULO 14. MANDATO DE POLÍTICA PÚBLICA.** El gobierno nacional, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, deberá presentar una política pública integral para la resocialización y reincorporación que integre a las diferentes entidades de la sociedad civil, nación, ramas del poder público, entes de control y entes territoriales con metas definidas y costo presupuestal para la implementación.  Dicho proyecto de política pública deberá ser presentado al año siguiente de la entrada en vigencia de la presente ley.  Sus seguimiento y resultados serán publicados de forma anual en la página web de las entidades nacionales que intervienen en el proceso. | Se modifica la numeración del artículo. |
| **ARTÍCULO 16. VIGENCIA.** La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. | **ARTÍCULO 15. VIGENCIA.** La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. | Se modifica la numeración del artículo. |

1. **PROPOSICIÓN.**

Haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley 5 de 1992, de conformidad con las consideraciones expuestas, me permito rendir informe de **PONENCIA POSITIVA** y respetuosamente sugiero a los Honorables Representantes de la Comisión Primera **DAR PRIMER DEBATE** al **Proyecto de Ley Nº 181 DE 2022 Cámara. *“Por medio de la cual se establecen medidas que permitan la resocialización y reincorporación y se dictan otras disposiciones.”*** en los términos presentados en el Pliego de Modificaciones propuesto.

Cordialmente,

**HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ**

**Representante a la Cámara**

**TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY No. 181 DE 2022 Cámara.**

**“*Por medio de la cual se establecen medidas que permitan la resocialización y reincorporación de las personas privadas de la libertad (PPL) en Colombia, se modifica el Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones.”***

**EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**DECRETA:**

**CAPÍTULO I**

**GENERALIDADES**

**ARTÍCULO 1. OBJETO.** La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos de articulación entre el Estado y el sector privado, con el fin de permitir la correcta resocialización y reincorporación a la vida social y productiva de aquellas personas que por causa de condenas penales o procesos de reincorporación de grupos armados organizados, son hoy población vulnerable.

**ARTÍCULO 2. DESTINATARIOS.** Serán destinatarios de la presente ley:

1. **Reincorporados.** Aquellas personas que hayan cumplido la pena de prisión o que hayan sido beneficiarios de medidas alternativas o amnistías como consecuencia de procesos de paz o de negociaciones que haya hecho el Gobierno Nacional con diferentes grupos organizados al margen de la ley.
2. Las autoridades y entidades públicas a nivel nacional o territorial que, en el marco de sus funciones sean competentes en procesos de reincorporación y resocialización.
3. Los particulares que, como consecuencia de su actividad privada, brinden ayuda en materia económica, laboral, educativa o de cualquier tipo para generar un tejido social apto que contribuya a la resocialización y reincorporación.

**ARTÍCULO 3. PROFESIONALES PARA LA RESOCIALIZACIÓN.** Todos los centros penitenciarios y carcelarios deberán contar con un grupo de psicólogos y trabajadores sociales, que propenderán por la resocialización y reinserción social de las personas privadas de la libertad. Así mismo, velarán por la continuidad de los penados en la capacitación y los procesos productivos, la orientación y el acompañamiento en procesos psicosociales.

**ARTÍCULO 4.  ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.** Se autoriza al Gobierno Nacional a realizar Asociaciones Público Privadas (APP) como instrumento de vinculación de capital privado, para financiar programas de apoyo a la reincorporación y resocialización.

Dichas alianzas podrán incluir emprendimientos estatales que permitan la explotación económica y comercial de privados, cuya mano de obra sea mayoritariamente personas reincorporadas.

**ARTÍCULO 5. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.** El Ministerio de Justicia y del Derecho en conjunto con el Ministerio del Trabajo ejercerán el control, inspección y vigilancia sobre las Alianzas Público Privadas que se generen como consecuencia del artículo 4 de la presente ley.

**CAPÍTULO II**

**RUTAS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN**

**ARTÍCULO 6. AMPLIACIÓN PROGRESIVA, PROGRAMAS DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN.** El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y la Unidad de Servicio Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, deberán presentar un plan de ampliación de los programas de trabajo y estudio intracarcelario que permita tener los cupos suficientes para todas las personas que cumplen penas. Dicho plan deberá ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

El servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, deberá desarrollar programas focalizados para la capacitación completa, integral y sostenida en el tiempo para los reincorporados, y, aquellos que aún están cumpliendo pena, dicha formación deberá acompañarse de asistencia para el emprendimiento y la vinculación laboral.

Para lo anterior, se autoriza al servicio Nacional de Aprendizaje- SENA a realizar Asociaciones Público Privadas (APP) para lograr obtener el mayor beneficio en cuanto a espacios laborales para los reincorporados o penados.

**ARTICULO 7. SEGUIMIENTO Y SOSTENIMIENTO.** Culminada la etapa de capacitación, la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional o quien haga sus veces, deberá crear un programa de apoyo y seguimiento a los proyectos productivos de los reincorporados interesados. El seguimiento deberá garantizar el monitoreo y asistencia técnica, con lineamientos claros que permitan concretar las metas de desarrollo de emprendimiento de cada reincorporado.

**ARTÍCULO 8. PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN SOCIAL.** El Gobierno Nacional, deberá en el término de un (1) año desarrollar una estrategia integral de concientización social frente a la necesidad de brindar oportunidades laborales, económicas e integración social para reincorporados.

Dichos programas deberán incluir despliegue en medios masivos de comunicación, mesas de trabajo que integren autoridades territoriales y miembros de la sociedad civil que permitan establecer mecanismos de socialización social.

**CAPÍTULO III**

**BENEFICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA RESOCIALIZACIÓN**

**ARTÍCULO 9. ADICIÓNESE EL NUMERAL 10 AL ARTÍCULO 235-2 Y EL PARÁGRAFO 9 AL ARTÍCULO 240 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL.**

**Artículo 235-2.**

10. Las rentas percibidas por personas reincorporadas en el marco de proyectos de emprendimiento por un término de tres (3) años.

Dicha exención se aplicará posterior a la prueba de sentencia cumplida o reconocimiento como ex miembro de grupo organizado que haya sido beneficiario de proceso de negociación con el gobierno nacional. La reincidencia será causal de pérdida inmediata del beneficio.

El presente beneficio aplicará únicamente para aquellos reincorporados que hayan cumplido pena o hayan sido beneficiados entre el año 2000 y hasta la fecha.

No será aplicable el presente beneficio a las rentas que clasifiquen como rentas laborales o de trabajo.

**Artículo 240.**

Parágrafo 9. Las sociedades nacionales en las cuales el 100% de sus socios o accionistas cumplan con la calidad de reincorporados tributarán a una tarifa del 0% por un término de tres (3) años desde su constitución.

Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a los socios o accionistas que cumplan con la calidad de reincorporados tributarán a una tarifa del 0%.

Cuando una sociedad beneficiaria de la presente tarifa en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios reparta dividendos a una persona natural o jurídica que no cumpla las condiciones de reincorporado, estos estarán sujetos a las tarifas señaladas en los artículo 240 y 242 de este Estatuto, según el periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta.

**ARTÍCULO 10. ADICIÓNESE AL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL EL ARTÍCULO 108-6. DEDUCCIÓN POR CONTRATACIÓN LABORAL A REINCORPORADOS.** Los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir el 250% de los pagos que realicen por concepto de salario, en relación con los empleados que cumpla la condición de reincorporados.

La deducción máxima por cada empleado no podrá exceder doscientos cuarenta (240) UVT mensuales y procederá en el año gravable en el que el empleado sea contratado por el contribuyente.

Para efectos de acceder a la deducción de que trata este artículo, debe tratarse de nuevos empleos y el empleado deberá ser contratado con posterioridad a la vigencia de la presente Ley y cumplir con las calidades de reincorporados.

La Fiscalía General de la Nación expedirá al contribuyente una certificación en la que se acredite que sus trabajadores cumplen con las calidades de reincorporados como requisito para poder acceder a la deducción de que trata ese artículo.

La Fiscalía General de la Nación llevará un registro anualizado de todas las certificaciones de contratación a reincorporados que expida, con la identificación del empleado y del contribuyente.

**CAPÍTULO IV**

**DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA**

**ARTÍCULO 11. PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES DE LA POBLACIÓN POST PENADA.** En los procesos de licitaciones públicas, concurso de méritos, para incentivar el sistema de preferencia a favor de las personas naturales post penadas o personas jurídicas que tengan trabajadores pertenecientes a la población post penada, las entidades estatales deberán otorgar el cero punto cinco por ciento (0.5%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten estas vinculaciones en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas pertenecientes a la población post penada en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el cero punto cinco por ciento (0.5%) a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores de la población post penada, señalados a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente** | **Porcentaje mínimo de trabajadores de la población post penada exigido** |
| Entre 1 y 30 | 1 |
| Entre 31 y 100 | 3 |
| Entre 101 y 150 | 5 |
| Entre 151 y 200 | 7 |
| Más de 200 | 10 |

**Parágrafo.** Para efecto de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación.

**ARTÍCULO 12. SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** Las entidades a través de los supervisores o interventores del contrato, según corresponda, deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores de la población post penada que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre.

Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de trabajo, y, la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.

**Parágrafo.** La reducción del número de trabajadores de la población post penada acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

**ARTÍCULO 13. SISTEMA DE PREFERENCIA.** En cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 y 8 del artículo 13 de la ley 1618 de 2013, si en la evaluación hay empate entre proponentes que cumplan con el requisito de planta de población post penada, se remitirá a los criterios de desempate convencionales para el tipo de modalidad contractual que esté en curso.

**CAPÍTULO V**

**DISPOSICIONES FINALES**

**ARTÍCULO 14. MANDATO DE POLÍTICA PÚBLICA.** El gobierno nacional, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, deberá presentar una política pública integral para la resocialización y reincorporación que integre a las diferentes entidades de la sociedad civil, nación, ramas del poder público, entes de control y entes territoriales con metas definidas y costo presupuestal para la implementación.

Dicho proyecto de política pública deberá ser presentado al año siguiente de la entrada en vigencia de la presente ley.

Sus seguimiento y resultados serán publicados de forma anual en la página web de las entidades nacionales que intervienen en el proceso.

**ARTÍCULO 15. VIGENCIA.** La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,

**HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ**

**Representante a la Cámara**

1. Corte Constitucional. Sentencia T 881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Constitucional. Sentencia T 881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Constitucional. Sentencia T 291 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Constitucional. Sentencia T 881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. [↑](#footnote-ref-4)
5. **Sentencia T-265 de 2017 Corte Constitucional.** En reiteradas sentencias de la Corte se ha pronunciado sobre el debido proceso. En este sentido la referida sentencia puntualiza el concepto y finalidad, así como las garantías. En el mismo sentido el **DEBIDO PROCESO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-**Vulneración por incumplimiento de orden judicial que otorgó beneficio de prisión domiciliaria con dispositivo de vigilancia electrónica y **FUNCIONES Y FINES DE LA PENA-**Teoría de la prevención general negativa**/FUNCIONES Y FINES DE LA PENA-**Teoría de la prevención general positiva, entre otros. [↑](#footnote-ref-5)
6. **Sentencia 267/18 Corte Constitucional. En ella reitera: ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO-**Lineamientos para su seguimiento a partir de mínimos constitucionales asegurables “*En el caso de la población carcelaria, la Corte Constitucional ha ofrecido lineamientos para el seguimiento al estado de cosas inconstitucional a partir de mínimos constitucionalmente asegurables. Estos parámetros no solo sirven para orientar la evolución de la estrategia de superación de dicho estado de cosas, sino también como guía, en los casos concretos, a la hora de establecer la naturaleza de la vulneración fundamental y el remedio judicial procedente para conjurarla. También, como punto de referencia necesario del diálogo interinstitucional que acabamos de referir. Los mínimos que deben ser garantizados en la vida en reclusión por las autoridades competentes se refieren a los siguientes aspectos: i) la resocialización, ii) la infraestructura carcelaria, iii) la alimentación al interior de los centros de reclusión, iv) el derecho a la salud, v) los servicios públicos domiciliarios y vi) el acceso a la administración pública y a la justicia. Estos mínimos constitucionalmente asegurables, como señaló la Sala Especial de Seguimiento, tienen carácter prima facie, es decir, no constituyen una lista taxativa ni exhaustiva que agote los temas de los cuales deben ocuparse las autoridades competentes, de manera que es plausible su adaptación a diferentes contextos (cárceles de mediana y alta seguridad, de hombres, de mujeres, mixtas, población carcelaria condenada y sindicada, ubicación geográfica, disponibilidad de recursos técnicos, entre otros)”.* [↑](#footnote-ref-6)
7. **Sentencia T-286/11 de la Corte Constitucional nos define el concepto y la finalidad de la pena. TRATAMIENTO PENITENCIARIO-***“El concepto de tratamiento penitenciario en los siguientes términos: “Se entiende por Tratamiento Penitenciario el conjunto de mecanismos de construcción grupal e individual, tendientes a influir en la condición de las personas, mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades, para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos, productivos, autogestionarios, una vez recuperen su libertad. Dando cumplimiento al Objetivo del Tratamiento de preparar al condenado(a) mediante su resocialización para la vida en libertad (…)”***TRATAMIENTO PENITENCIARIO-** “*Acerca de la finalidad del tratamiento penitenciario, el artículo 10 de la Ley 65 de 1993 refirió que su propósito se centra en el logro de la resocialización del individuo, en los siguientes términos: “…El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario” Es importante anotar que el tratamiento penitenciario se da en el marco de la ejecución de la sanción penal, la cual le corresponde hacer cumplir al poder ejecutivo dentro de los lineamientos trazados por el legislador. el tratamiento penitenciario está predominantemente dirigido a las personas que se encuentran condenadas a pagar una pena, sin embargo, el INPEC tiene el deber de brindar una atención integral a todos los internos sin importar la situación jurídica de quienes se encuentren en los centros de reclusión, en su calidad de sindicados/as o condenados/as”.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Sentencia C-026 de 2016 Corte Constitucional. **CODIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO-**Tratamiento penitenciario/**RESOCIALIZACION DEL DELINCUENTE-**Finalidad del tratamiento penitenciario/**REINSERCION PARA LA VIDA EN LIBERTAD-**Objetivo del tratamiento penitenciario. [↑](#footnote-ref-8)
9. Defensoría del Pueblo. 2018. Análisis sobre el actual hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia. [[en línea](http://www.defensoria.gov.co/es/public/Informesdefensoriales/785/An%C3%A1lisis-sobre-el-actual-hacinamiento-carcelario-y-penitenciario-en-Colombia-Informes-defensoriales---C%C3%A1rceles-Informes-defensoriales---Derechos-Humanos.htm)] [↑](#footnote-ref-9)
10. Banco Mundial. BIRF-AIF. 2018. Infraestructura y alianzas público-privadas. [[Disponible en línea](https://www.bancomundial.org/es/topic/publicprivatepartnerships/overview)] [↑](#footnote-ref-10)
11. https://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2021/Gobierno-Nacional-avanza-para-que-en-2022-esten-definidas-las-hojas-de-ruta-de-reincorporacion-de-excombatientes.aspx [↑](#footnote-ref-11)
12. https://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2022/7-de-cada-10-excombatientes-en-reincorporacion-estan-vinculados-a-un-proyecto-productivo.aspx [↑](#footnote-ref-12)
13. http://190.25.112.18:8080/jasperserver-pro/flow.html?\_flowId=dashboardRuntimeFlow&dashboardResource=/public/DEV/dashboards/Dash\_\_Poblacion\_Intramural&j\_username=inpec\_user&j\_password=inpec [↑](#footnote-ref-13)
14. (Gaceta Constitucional N°67, sábado 4 de mayo de 1991, pág. 5). [↑](#footnote-ref-14)
15. Sentencia C-859-2001 **Corte Constitucional. GASTO PUBLICO-**Iniciativa legislativa.  [↑](#footnote-ref-15)